

# La Jornada Ojerasca

Suplemento mensual. Número 134. Junio 2008



¿Qué se trae el gobierno en Chiapas?  
El CNI, en las resistencias de los pueblos  
Boaventura de Sousa: Latinoamérica bipolar  
Raúl Zibechi desde la Colombia indígena  
Persiguen a la policía comunitaria de Guerrero  
Chile: las vergüenzas de un gobierno "democrático"  
El movimiento indígena independiente  
emplaza al presidente Correa  
Gelman y Maiakovski descubren México

Jose Carlo González:  
los días en la Huichola

## ¿Qué se trae el gobierno en Chiapas?

La palabra "guerra" se ha vuelto más familiar, más trivial, y también más grave en los últimos tiempos. No se mencione el contexto internacional, que ya qué decir. Ni siquiera el latinoamericano, donde casi de la nada se han dibujado escenarios probables de guerras internacionales y de secesión que hace poco quién hubiera dicho. No. Baste con mencionar lo que acontece en México.

¿Qué guerras tenemos? Oficialmente dos, sangrientas y visibles. La que muy publicitadamente declaró el gobierno al narcotráfico (¿o fue al revés?). Y la que libran entre sí bandas y cárteles; ésta deriva en otras, dependiendo de las complicidades con diversos sectores del bando oficial. Una colección de guerrillas alimentadas por una corrupción bicéfala: la del crimen organizado, y la del atomizado poder gubernamental (a río revuelto, ganancia de inversionistas y gobernadores).

En México se practica una persecución tan virulenta contra los inmigrantes centroamericanos (cuyo destino principal no es nuestro país), y ya institucionalizada y bendecida por la panista Cecilia Romero, que además de vergüenza nacional es una suerte de guerra. De la más abusiva clase: contra personas pobres, aisladas e indefensas.

Pero guerra, lo que se dice guerra, es la que libra el gobierno federal contra los pueblos indígenas. Nahuas de Zongolica y la Huasteca.

Pueblos zapotecos de la sierra y de la Mixteca oaxaqueña. Mepha'a, mixtecos, nahuas y amuzgos de Guerrero. Un puñado de guerras no declaradas y hasta vergonzantes, pero que cuestan vidas, desalojos, violaciones, cárcel, heridos graves.

De unos años acá existe una efervecencia guerrillera o insurreccional de contornos difusos, quintaescenciada en las acciones y declaraciones del Ejército Popular Revolucionario, con el cual el gobierno ensaya una limitada "negociación", al calor de los atentados del EPR contra instalaciones petroleras y la desaparición violenta de dos miembros suyos, de la cual las autoridades federales insisten en deslindarse. Por ése, y otros casos, tal guerra tiene desaparecidos. Que lo señalara Amnistía Internacional a fines de mayo desató una soberana pataleta de Juan Camilio Mouriño, secretario de Gobernación, y sus columnistas de cabecera.

Todo esto ha provocado una degradación, a niveles históricos, de los derechos humanos en México. Otra cosa es que haya, como

nunca, vigilancia y solidaridad nacional e internacional.

Pero la única guerra declarada formalmente, con dos fuerzas confrontadas en un territorio definido, es la que no ha dejado de transcurrir en Chiapas todos los días desde 1994. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene una actitud pacífica, no beligerante, desde el 12 de enero de aquel año, amparado en una ley para la paz y la concordia del Congreso de la Unión. No obstante, esa guerra no ha cesado pues cuatro sucesivos gobiernos federales y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no dejan de escalarla y administrarla a distintas intensidades contra las comunidades zapatistas en más de 40 municipios autónomos.

Contraingurgencia económica, educativa, agraria, y con frecuencia armada. Vasta militarización de las montañas y la selva. Un dispositivo bélico letal e intacto, a pesar de la expresa voluntad de paz de los pueblos en resistencia y de su ejército indígena.

Desde fines de mayo de 2008 dicho dispositivo, en aparente letargo, se puso en marcha sin otro motivo que la provocación, escudado en pretextos de la búsqueda de marihuana, maderas preciosas o videos piratas. Y como siempre sucede, las comunidades (hombres, mujeres, niños y ancianos) salen al paso de las tropas que intentan ocupar sus campos y poblados, y las obligan a retroceder.

Por si no lo sabían el Ejército federal, las policías y los desdenosos medios de distracción masiva, la determinación de los pueblos en resistencia permanece también intacta, y ha conquistado una legitimidad innegable, no sólo en sus demandas, sino en sus acciones de gobierno (pues construyeron gobiernos autónomos) y sus iniciativas políticas pacíficas.

Mas el gobierno busca la guerra. Se saca de la manga provocaciones y difamaciones. ¿Por qué desestabilizar las difíciles zonas indígenas de Chiapas, donde las juntas de buen gobierno y las políticas firmes pero conciliadoras de los zapatistas garantizan una gobernabilidad regional que ya quisieran en la República del licenciado Calderón Hinojosa?

Ha de ser por eso.

# umbra

### El CNI, en las resistencias de los pueblos

El Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció la vigésimoprimer reunión de la región Centro-Pacífico en Mesa del Tirador, comunidad wixárika de Wuat+a, municipio de Bolaños, Jalisco, del 4 al 6 de julio próximo, bajo la consideración de que "los pueblos indígenas de México han sido sometidos históricamente a los peores despojos, atracos judiciales, explotación, represión y destrucción indiscriminada de sus territorios y cultura por parte de los grandes capitalistas, latifundistas y gobernantes y que en los últimos años y meses los gobiernos neoliberales han recurrido a un conjunto de leyes y políticas oficiales tendientes a la destrucción y privatización de nuestras tierras, territorios, base alimentaria y cultura".

También declaró que, "ante la firme voluntad del Estado mexicano por no reconocer los derechos fundamentales de nuestros pueblos, éstos han decidido ya no solicitar el reconocimiento legal de sus derechos y sí ejercer tales derechos y la autonomía en los hechos. La unidad de los pueblos indígenas del país y el fortalecimiento inmediato del CNI son dos tareas urgentes para afrontar la realidad cotidiana de nuestros pueblos". Y destacó que "las comunidades zapatistas hermanas están siendo sometidas a una salvaje campaña militar y paramilitar que busca su exterminio definitivo".

Apenas en mayo pasado, el CNI realizó la tercera reunión de la región noroeste en la comunidad Juntas de Nejí, territorio de la nación kumiai, Baja California. Delegados de los pueblos cucapá, mayo, tohono o'odham, yaqui y kumiai acordaron rechazar "los proyectos neoliberales" de la Escalera Náutica, la carretera costera en territorio yaqui y el gasoducto de la empresa Sembra Energy que atraviesa el territorio kumiai de San José de la Zorra. Estos "benefician a las políticas neoliberales de destrucción y muerte".

Los pueblos anunciaron que seguirán "en la lucha por la reconstitución y recuperación de nuestros territorios, manteniendo las asambleas comunitarias en nuestros pueblos, tribus y naciones indígenas, donde para nosotros la ley suprema son los Acuerdos de San Andrés Sacamech'en de los Pobres, donde el pueblo manda y el gobierno obedece, para ejercer la autonomía y la libre determinación en los hechos, sin tener que pedir permiso al mal gobierno".

El CNI noroeste exigió que se libere de los cargos, imputados por la defensa de su territorio kumiai de San José de la Zorra, a María Eva Carrillo Vega y Fausto Díaz Carrillo. Refrendó el apoyo a la lucha del pueblo cucapá, exigiendo la libertad de pesca dentro de su territorio y el fin del hostigamiento a la comunidad de El Mayor por parte de la policía de los tres niveles de gobierno. Demandó la restitución de los territorios del pueblo tohono o'odham, despojados por el expresidente municipal Pesqueira, de Altar, y por los terratenientes de San Francisquito en el municipio de Sonoita, Sonora". (Ojarasca)

## Latinoamérica bipolar: los movimientos se mueven

Entrevista con Boaventura de Sousa Santos

América Latina es pieza clave en las estrategias de las empresas transnacionales y los gobiernos del Norte global. La expansión del mercado ha convertido el agua, los servicios de salud y la educación en mercancía. La mercantilización de los recursos naturales es fundamental para la acumulación de capital a mediano plazo, poniendo la biodiversidad enorme de América Latina en el centro.

El proceso de "reenfocar" América Latina se aceleró por el fracaso de la guerra en Irak. Estados Unidos encontró que durante su relativa ausencia en su *backyard*, se gestaron cambios y los procesos sociales avanzaron fuera de su control, resultando en gobiernos progresistas y movimientos sociales fuertes que llegaron al poder a través de la democracia, cuando Estados Unidos usa el discurso de la democracia para justificar sus intervenciones.

En este escenario se desarrolla una nueva contraingurgencia, mezcla de las estrategias de la Alianza para el Progreso con una política de división de los movimientos; específicamente el indígena. De manera brutal se criminaliza la protesta y se profundiza la militarización. Incapaz de generar apoyo popular, el neoliberalismo intenta sustituir "desarrollo" y "democracia" por "control" y "seguridad".

Esto es consecuencia de la profundización de la exclusión social, la miseria y la desigualdad, que implica la emergencia de un fenómeno de fascismo social. No un régimen político, sino una forma de sociabilidad donde unos tienen capacidad de veto sobre la vida de otros. Corremos el riesgo de vivir en sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas.

El mejor ejemplo de esta lógica es el doloroso incremento del hambre en el mundo, que muestra la contradicción entre la vida y la ganancia. La emergencia del fascismo social muestra que la modernidad como proyecto está rota, porque no ha cumplido sus promesas de libertad, igualdad y solidaridad, y no va a cumplirlas.

Se presenta entonces la contradicción entre el paradigma de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, y los Estados que reivindican su soberanía, los movimientos sociales, y específicamente las luchas de los pueblos indígenas. En los territorios indígenas se encuentra el 80 por ciento de la biodiversidad latinoamericana. Organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú y la Coordinadora Nacional de Ayllus y Marqas, son un peligro para el status quo.

La criminalización de la disidencia en América Latina es aún más fuerte contra los indígenas, como vemos en Perú y Chile. Existe la intención de transformar a los indígenas en los terroristas del siglo XXI, como muestran los documentos de la CIA. El uso de las leyes antiterroristas contra los dirigentes indígenas se basa en una descaracterización total del concepto del terrorismo, ya que esto significa el ataque y el daño a civiles inocentes. En el caso de las luchas indígenas se trata de ataques a la propiedad privada para defen-

der otra propiedad, la comunitaria y ancestral. Esto no cabe en ningún concepto de terrorismo.

La regionalización subnacional ha sido promovida por el Banco Mundial en forma de descentralización, que apuntó a desmontar el Estado central a través de la transferencia de responsabilidades a los niveles locales. En Bolivia había una descentralización dirigida por las autonomías indígenas, desde una visión política y cultural sólida, que permitió que los indígenas ganaran algo con las políticas de descentralización del BM.

Pero la bandera de la descentralización ha sido asumida ahora por las oligarquías en respuesta a su pérdida de control del Estado central. Ellos siempre fueron centralistas, pero ahora toman la bandera de la autonomía para defender sus privilegios económicos. Esto generó un problema político para el movimiento indígena en Bolivia, que ha promovido la autonomía de los oprimidos, no de los opresores. La "autonomía" de Santa Cruz es ilegal bajo la vieja Constitución; una nueva está por ser aprobada. La decisión de las autonomías tocaría al Congreso.

He defendido en Bolivia la distinción entre autonomías ancestrales y las de la descentralización.

Propongo entender a las autonomías indígenas como extraterritoriales en relación a las autonomías departamentales. Se deberían basar en el control total de su territorio, fuera de la gobernabilidad descentralizada, ya que son anteriores al proceso de descentralización. Pero habría que fortalecer la institucionalidad indígena, que aún es frágil, frente al poder de las oligarquías bolivianas.

El debate actual es peligroso, ya que existen deseos recíprocos de enfrentamiento armado. Las oligarquías no quieren dejar sus privilegios, y los indígenas no van a dejar pacíficamente que se divida al país. Serían ellos los que lo defenderían.

Colombia y Perú representan al status quo neoliberal, y a Estados Unidos en la región. Son complementarios. Colombia representa la lógica militar que busca conflictos y tensiones que crean condiciones para la militarización e intervención. En Perú se impulsa una lógica similar, con fuerte criminalización de las organizaciones sociales, primer paso que prepara la militarización posterior. Existen indicios que la base de Manta en Ecuador se mudará a la Amazonía peruana.

Estamos entrando en una fase histórica de polarización. A un lado, las políticas de mercantilización buscarán libre acceso a los recursos naturales, y la continuidad de los privilegios de las élites. Al otro, existe un imaginario radicalizado en las fuerzas progresistas del continente que han desarrollado concepciones distintas de democracia, desarrollo, derechos y sustentabilidad, compartidas por cada vez más personas y organizaciones. Las fuerzas dominantes ya no pueden cooptar este imaginario radical con sus propuestas de protección social. Por esto la represión.

El horizonte siguen siendo la democracia y el socialismo, pero un socialismo nuevo; su nuevo nombre es democracia sin fin. La democracia radical es una alternativa a dos ideas fundamentales. No creo que se pueda cambiar el mundo sin tomar el poder, pero tampoco podemos cambiar algo con el poder existente. Entonces, debemos cambiar las lógicas del poder, y para ello las luchas democráticas son cruciales, y son radicales por estar fuera de las lógicas tradicionales de la democracia. Debemos profundizar la democracia en todas las dimensiones de la vida. Desde la cama hasta el Estado, como dicen las feministas. Pero también con las generaciones futuras y con la naturaleza, lo cual urge para detener la destrucción del planeta.

Nuestro objetivo es salir de una democracia tutelada, restringida, de baja intensidad, para llegar a una democracia de alta intensidad que haga al mundo cada vez menos confortable para el neoliberalismo. Pero la realidad no cambia espontáneamente. En política para hacer algo hay que tener razón a tiempo, en el momento oportuno; y tener fuerza para imponer la razón.

De una entrevista realizada por Raphael Hoetmer en Lima, Perú, durante la Cumbre de los Pueblos, en mayo. (www.lavaca.com)



PEREGRINOS JICAREROS EN EL CERRO JUTZE

La Jornada  
Directora General: Carmen Lira Saade  
Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca en La Jornada  
Dirección: Hermann Bellinghausen  
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera  
Edición: Gloria Muñoz Ramírez y Eugenio

Bermejillo • Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán • Caligrafía: Carolina de la Peña • Retoque fotográfico: Alejandro Pavón • Asesoría técnica: Francisco del Toro

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. San-

ta Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, cp. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en Ojarasca, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de titu-

lo: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

**El Cauca, Colombia.** Un enorme desierto verde. Saliendo del aeropuerto de Cali un mar de plantaciones de caña de azúcar tapiza la extensa llanura del Cauca, una de las regiones más fértiles del país, donde hace apenas dos décadas se extendían los cultivos cafeteros. "Es el negocio de los agrocombustibles", brota desde el asiento trasero de la camioneta la voz de Manuel Rozental, médico que acompaña desde hace años al movimiento indígena del Norte del Cauca. Por la Panamericana se cruzan "trenes cañeros" con su desmesurada carga hacia las refineras que bordean la carretera, ante la mirada indiferente y casi perdida de hileras de afros que deambulan hacia sus precarias viviendas.

Casi una hora y llegamos a Santander de Quilichao, un pueblo grande y cansino de unas 70 mil almas, la primera ciudad del departamento del Cauca que aparece en la carretera. La población negra luce ampliamente mayoritaria, emigrada o desplazada por la guerra, ocupada en la zafra cañera y en el comercio local. La primera sensación es de inseguridad, quizá por el desorden reinante y, seguramente, por los comentarios de los compañeros de ruta, que no dejan de mentar que sigue siendo plaza fuerte de los paramilitares. Manuel deja su asiento a un par de guardias indígenas que lo ocupan en silencio, cargando sus bastones de mando que ostentan pequeñas cintas de colores.

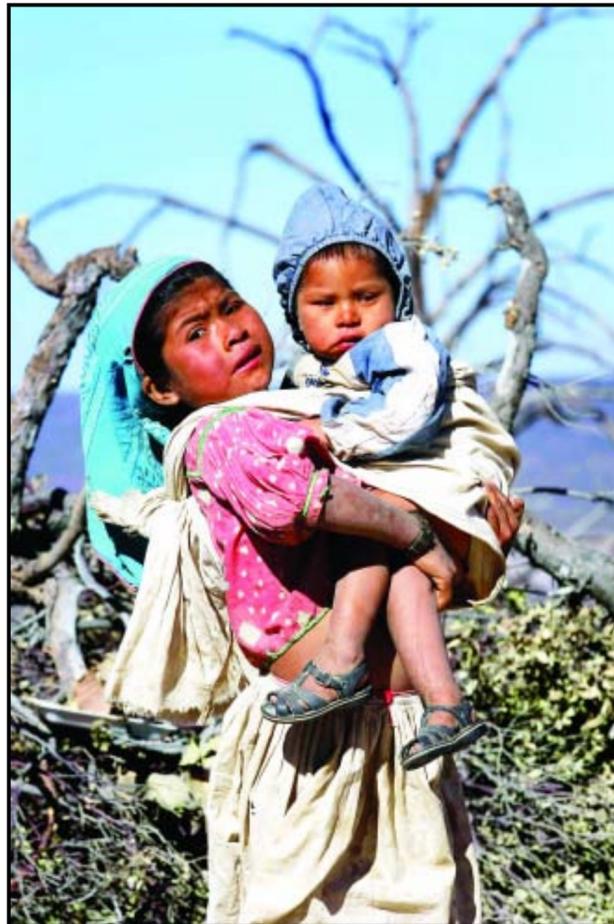
**La Cordillera Central es uno de los principales escenarios de la guerra entre el ejército colombiano y las FARC. La población rural, campesina e indígena, el sector más castigado por los enfrentamientos armados, se defiende con la Guardia Indígena**

**Hacia la cordillera.** Saliendo de la ciudad rumbo a la cordillera, en un santiamén desaparecen los cañaverales. Frondosas arboledas marcan el confín: los gigantescos samanes, el árbol de la lluvia, de extensas copas redondeadas capaces de cobijar un campo de fútbol, los floridos guayacanes, las monumentales ceibas verde cetrino, tulipanes y gualandayes de flores violáceas, cachimbos, cámbulos repletos de capullos rojos, higueros y matapalos. Sobresalen las espigadas guaduas de troncos redondos y finas hojas, los bambúes tan apreciados por los campesinos. Sobre los arceses, hileras de soldados observan los vehículos.

LA OTRA COLOMBIA

## Autoprotección indígena contra la guerra

Raúl Zibechi



CIENEGA DE LOS CABALLOS, MUNICIPIO DE MEZQUITUIT, JALISCO

El ronquido del motor delata el desnivel. Las crestas se recortan sobre nubes y neblinas y, allá abajo, a plomo, el río Palo recoge las aguas de las cordilleras. Sólo se ven montañas, cimas detrás de cimas, paredes verdes engalanadas por cascadas plateadas. En las laderas casi perpendiculares se prenden los cultivos: los bananos protegen los cafetales del inclemente sol ecuatorial, pero también los cultivos de pancoger, la yuca, el frijol y, más arriba en tierras frías, la papa y el maíz. Un abigarrado vergel comparado con la letanía monocorde del cañaveral. Llegamos a un sitio que denominan El Tierrero, el último poblado del resguardo indígena Huellas-Caloto. Giramos a la izquierda y dejamos el asfalto por una trocha irregular pendiente arriba. Luego de unos cuantos

bamboleos el carro llega a El Damián, la vereda [o comunidad] de la discordia, en el resguardo de Tacueyó. Primera sorpresa: debajo de los bananos ya no se ven cafetales, sino plantaciones de coca que crecen en las laderas soleadas a más de dos mil metros de altitud.

Desde mediados de marzo se producen combates entre los guerrilleros de las FARC y el ejército que se asentó, como suele hacerlo, en el punto más alto de la montaña. En sus incursiones los militares hicieron volar una caleta de los guerrilleros donde almacenaban explosivos y, dicen, acopios de marihuana. La onda expansiva mató a un hombre nasa, hirió a catorce y derribó las viviendas en un radio de más de cien metros. Desde ese momento los 800 pobladores de las dos veredas veci-

nas, El Damián y La María, se refugiaron en la escuela rural elegida hace tiempo como lugar de "asamblea permanente", centro de reunión en casos de emergencia. Sobre la escuela una gigantesca bandera blanca atada sobre una larguísima caña, pretende disuadir a los armados. Más de la mitad son niños, el resto madres y ancianos. Los varones salen durante el día a cuidar los cultivos y las gallinas, eludiendo los combates. El director, joven e indeciso, agradece la visita y pide que no se encienda el grabador. Ropa tendida y colchones sobre el suelo desplazaron bancas y pupitres. Aunque los nasa desbordan las instalaciones desde hace una semana, salones, baños y pasillos lucen aseados delatando una férrea organización interna.

Una cartilla elaborada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca señala que en caso de emergencias la población acude a los sitios de asamblea permanente, espacios de "resistencia indígena definidos en asamblea, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario". Añade que se trata de resistir juntos "respetando la diversidad y la diferencia para que la tierra del futuro sea un tejido de conciencias colectivas y de autonomías en equilibrio y armonía con todos los seres de la vida".

Se trata de una de las experiencias más originales con que cuenta movimiento social alguno. "No somos ejércitos armados, no somos guerrilla, simplemente somos comunidad al servicio de las comunidades", se define a sí misma la propia guardia, empeñada en ser un instrumento de defensa del territorio. Para ello promueven la formación y la organización a través de la autoprotección de las comunidades. Sus estrategias de resistencia consisten en promover la soberanía alimentaria, las alertas tempranas, huertas comunitarias y, sobre todo, procesos de formación entre los que incluyen asambleas permanentes de reflexión y decisión y el fortalecimiento del derecho y las autoridades propias.

**Protección comunitaria.** Luis Alberto Mensa, 42 años, camina tan pausado que parece deslizarse sobre el suelo de tierra. Lleva el bastón de mando como único signo de autoridad, como todos los guardias que lo acompañan, pero es coordinador de todas las guardias indígenas de la

región. Asegura que "la guardia, que siempre existió entre los nasa, se vino a oficializar para hacerse visible en el 2001. Aquí la gente no creía que llegaría el conflicto armado porque ésta era una zona histórica de las FARC, pero entraron los paramilitares y nos mataron mucha gente y las asambleas decidieron instalar guardias permanentes".

La estructura de la guardia es muy sencilla: cada vereda elige en asamblea diez guardias y un coordinador; luego se elige un coordinador por resguardo y otra para toda la región, siempre en acuerdo con los gobernadores de los cabildos. Los guardias son elegidos por dos años pero buena parte deciden continuar. "En toda la zona del norte del Cauca tenemos 3 500 guardias correspondientes a los 18 cabildos. Hay jóvenes y mujeres, de 12 hasta 50 años. La formación es nuestro aspecto más importante y la hacemos a través de talleres en los que se discute derechos humanos y la ley nuestra, la ley originaria. Priorizamos la formación política por sobre los ejercicios físicos. La guardia es muy importante para la seguridad de la población y se ha convertido en un problema para los actores armados", señala Luis Alberto.

Los talleres son obligatorios y duran tres días; participan abogados, jueces y líderes comunitarios que relatan la historia, usos y costumbres del pueblo nasa. Luego cada coordi-

nador replica los mismos talleres en su vereda. Uno de los aspectos centrales es el denominado "derecho propio", la justicia comunitaria que orienta la actividad de la guardia indígena. "No tenemos nada que ver con una policía, somos formadores de organización, somos protección de la comunidad y defensa de la vida sin involucrarnos en la guerra". Sin embargo, tanto los militares como la guerrilla los consideran enemigos ya que dificultan el reclutamiento y se interponen en sus acciones militares.

Floresmiro, 33 años, es coordinador de los 300 guardias del resguardo de Tacueyó. "La guardia ha sido una escuela. Como convivimos con la insurgencia, a veces se te pasa por la cabeza irte con ellos para tener un fusil. Los que se van es porque les gustan las armas o porque tienen problemas con sus padres, pero los más porque son hijos abandonados. En la guerrilla, o en el ejército, sienten que mandan, que tienen poder".

Como la participación en la guardia es voluntaria y no remunerada, los vecinos de la vereda y las autoridades colaboran en el mantenimiento de la huerta familiar y en ocasiones hacen mingas para desbrozarla, sembrar o cosechar. "Acá la formación es la clave. Trabajamos mucho la cosmovisión nasa que rechaza la violencia, nos defendemos a través del alerta y la organización y nos interponemos entre los armados, en grupos para que no ataquen a la

comunidad. Enseñamos a la gente lo que debe hacer en caso de emergencia. Convocamos a los guardias por las emisoras o los celulares y movilizamos a la población por los radios. En sólo cuatro horas juntamos a los 300 guardias de mi resguardo".

Luis Alberto propone caminar unos cientos de metros para conocer la caleta volada por el ejército. Unos 40 guardias se ponen en marcha por una trocha embarrada. En el camino encontramos dos "tatucos" sin estallar, granadas caseras lanzadas a distancia por la guerrilla. Los guardias se juntan y deciden colocarlas en algún lugar seguro para evitar que los niños las manipulen. Al llegar al enorme hueco dejado por la explosión, a unos cien metros aparecen tres jóvenes guerrilleros debajo de los platanales. El jefe de la guardia no se inmuta. "¿Dónde está el ejército?". "Allá", señala con el bastón hacia la cresta. Unos y otros se observan, se vigilan, y cada pocos días se disparan, con la misma calma con que la guardia indígena se pasea entre los dos ejércitos.

"La guardia es más educativa que represiva y contribuye a evitar que los jóvenes se integren en los grupos armados", sostiene Manuel UI, el joven coordinador de la guardia de Huellas. Los jóvenes se quedan hechizados mirando el cráter provocado por la explosión que dio origen a los enfrentamientos de marzo pasado. Poco a poco se encaminan hacia la escuela donde nos espera el almuerzo. El calor del mediodía trasmuta la calma en una rara sensación de placidez. Rodeado de guardias indios, es casi imposible no sentir una sensación de seguridad, insólita en estas tierras.

(Del periódico electrónico La Vaca, Argentina)



## Persiguen a la policía comunitaria de Guerrero

La Policía Comunitaria de Guerrero, una de las experiencias de autonomía indígena más importantes de México, responsable de disminuir en más de un 90 por ciento la delincuencia en las conflictivas regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, es nuevamente perseguida y hostigada por las autoridades del Estado.

La reciente embestida gubernamental contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-policía comunitaria), coincide con la expansión de este proyecto creado desde abajo por los pueblos mixtecos y tlapanecos (principalmente), en octubre de 1995. Empezaron a operar en sólo dos municipios, y actualmente hay más de 600 "comunitarios", como mejor se les conoce, distribuidos en 72 comunidades de diez municipios que comparten este sistema autónomo de justicia. Su mayor delito es haber probado la ineficiencia de los tres niveles de gobierno en materia de procuración y prevención de justicia, en una zona que entre 1992 y 1995 fue víctima de la más despiadada ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada, y no pocas veces por las propias policías estatales y municipales.

Marquelia, en la Costa Chica, es uno de los diez municipios en los que la CRAC no sólo detiene delincuentes, sino que legitima el derecho tradicional de perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación, asesinato, abigeato, entre otros). En esta demarcación, a finales de mayo pasado, la policía preventiva municipal agredió a "los comunitarios".

La CRAC denunció que cuando un grupo de dirigentes y policías de la comunitaria salía de Marquelia con destino a San Luis Acatlán, donde se encuentra su sede, una patrulla de policías preventivos de Marquelia intentó sacar su vehículo de la carretera. Los comunitarios lograron esquivar parcialmente el golpe directo contra ellos, sin poder evitar un golpe lateral a su camioneta, lo que provocó diversas lesiones a uno de sus comandantes y a un asesor. Después de la agresión los policías de la CRAC lograron desarmar y detener al policía que conducía la patrulla preventiva municipal, y condicionaron su liberación a que los gobiernos estatal y municipal se comprometieran a respetar a la corporación indígena, y a poner fin a la represión, persecución y hostigamiento en contra de sus miembros.

A veces son las autoridades municipales o estatales las que agraden a los comunitarios, otras, las presiones vienen del Ejército o de la Marina, y otras más de la Policía Federal Preventiva (PFP) o la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El asunto es que actualmente hay más de treinta órdenes de aprehensión en contra de los excomisarios de la policía comunitaria.

Mientras se arremete y persigue a la CRAC, se militariza el estado de Guerrero. La ocupación militar ha incrementado de manera alarmante la violación a los derechos humanos de una población indígena que, como diría Abel Barrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no sólo "aprende a resistir, sino a construir sistemas alternativos que son viables y que les permiten acceder, en este caso, a la justicia".

Gloria Muñoz Ramírez

# Chile: vergüenzas de un gobierno “democrático”



CAMPAMENTO DE JICAREROS EN LAS ORILLAS DEL POBLADO DE MEZQUITIC, JALISCO

## El “delito” de los documentalistas

PATRICIO GUZMÁN

Si un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento palestino Hamas y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los mapuche, que no poseen ni remotamente las armas y las ideas de Hamas.

Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tíbet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.

El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuche desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.

Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompa-

ñaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incommunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?

Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un Estado de derecho?

Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier democrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.

París, 30 de mayo

Patricio Guzmán, cineasta chileno reconocido mundialmente, autor del memorable documental en tres partes *Batalla de Chile* (1975-1979).

## Bachelet ha hecho de los mapuche “el enemigo”

El 29 de mayo pasado el mapuche Luis Catrimil Huenupe, de 60 años, fue condenado a cuatro años y un día de prisión en la cárcel de Angol, por “incendio simple”. Catrimil forma parte del grupo de comuneros sentenciados bajo diversos argumentos y procedimientos de participar en el incendio de la finca Poluco Podenco, en el sur de Chile. En esta ocasión, informa la periodista Lucía Sepúlveda “el tribunal no acogió los argumentos de los fiscales Luis Chamorro y Miguel Ángel Velásquez, quienes junto al abogado querellante de la gobernación de la provincia de Malleco, Mauricio Latorre, habían acusado a Catrimil de incendio terrorista, incumpliendo la promesa de la presidenta Bachelet de no recurrir más como gobierno a esa legislación del periodo de dictadura”.

Otros condenados, como Patricia Troncoso y Jaime Marileo han permanecido ya cinco años encarcelados y en marzo de este año lograron la salida de fin de semana y el traslado a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, tras una extensa y combativa huelga de hambre. José Huenchunao, en tanto, fue detenido en marzo de 2007 (luego de tres años de clandestinidad) y cumple condena en la cárcel de Angol, al igual que Marileo. Luego de 101 días sin ingerir alimentos y tras un mes de recuperación en el hospital de Temuco, Patricia fue trasladada al CET de la misma ciudad y cuenta con la salida dominical. Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo están recluidos en el CET de Victoria. Los cinco están sentenciados bajo la Ley Antiterrorista. El sexto prisionero por esta causa es José Llanquileo. Este militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue detenido en noviembre de 2006 tras estar cerca de tres años clandestino. Llanquileo —preso en Traiguén— fue sentenciado, en enero de 2007, a cinco años y un día por el delito de incendio simple, la misma calificación que aplicó a Catrimil este tribunal.

En abril de 2006, los comuneros José Cariqueo y Juan Carlos Colihuina fueron sometidos a juicio oral por las mismas acusaciones y sorpresivamente, con idénticos testigos, fueron absueltos de las imputaciones efectuadas por los fiscales. Mireya Figueroa y Juan Ciriaco Millacheo, también requeridos en este proceso, permanecen en la clandestinidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acogido la denuncia presentada contra el gobierno chileno por los presos políticos mapuche respecto de la inexistencia de un debido proceso y la negativa del gobierno de revisar las sentencias. Por estos hechos el gobierno chileno ha sido duramente cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos acerca de la aplicación de la ley antiterrorista del periodo pinochetista por delitos no relacionados con hechos de sangre.

(periodismosnador.blogspot.com)

# El movimiento indígena independiente emplaza al presidente Correa

Ecuador es ejemplo de que la revocación del mandato, siendo un eje de movilización social en ese país, ha tumbado presidentes pero no altera en nada las relaciones entre gobernantes y gobernados.

En menos de diez años cayeron Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). Lo extraño es que conforme los gobernantes se suceden en el cargo, el tirar presidentes se desgasta como solución y los nuevos gobernantes se allegan más y más elementos para contener, dividir, corromper o simplemente darle la vuelta a los movimientos. Baste recordar que, de Bucaram en adelante, al movimiento indígena se le da la posibilidad de “participar” del poder en la clase política ecuatoriana, como congresistas o ministros de varias carteras. Esta ilusión ha sido muy costosa para el movimiento indígena: con ella los operadores políticos internacionales logran dividirlo y nulificar a quienes cuentan con la visión más panorámica del daño y la devastación que el capital (encarnado en transnacionales y gobiernos) ejerce sobre los pueblos de todos los países.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha logrado mantener su autoridad moral ante el conjunto de los movimientos indígenas del continente porque, con altas y bajas y pese a los coqueteos de algunos y las traiciones de otros, sus dirigencias reconsideran desde hace unos años el enorme costo social de haberle apostado a insertarse en el poder político del país, y recibir los subsidios del Banco Mundial que con dinero logró diluir y oscurecer por un tiempo su enorme fuerza social.

Marlon Santi, alguna vez representante de Sarayacu —la legendaria y famosísima comunidad amazónica que resistió a la petrolera Repsol hasta expulsarla de sus territorios—, llega ahora a la presidencia de Conaie con una nueva mirada que desdramatiza el poder político del aparato estatal, lo sitúa en una dimensión más realista e insiste, junto con su nuevo Consejo de Gobierno, en reconstruir desde abajo el tejido organizativo como lo emprendiera en su momento su antecesor, Lucho Macas.

Antes de asumir su cargo Santi fue amenazado de muerte y a los pocos días fue secuestrada su esposa, Miriam Cisneros. Sus captores la hostigaron psicológicamente, la golpearon y le echaban agua mientras le repetían: “qué planea la Conaie contra el gobierno de Rafael Correa, qué planes tiene Marlon Santi, quiénes son los asesores de la Conaie, quiénes son las mujeres que dirigen la marcha contra el TLC” —preguntas absurdas y obtusas, por cierto. La agresión, que intentaba ablandar a Santi de entrada, pone de manifiesto que su ascensión como dirigente de la Conaie es vista por la derecha ecuatoriana y por algunos sectores “progresistas”, ligados o cercanos al gobierno de Correa, como una radicalización inesperada del movimiento indígena.

Y aunque hay quienes lo veían “muy verde” o “muy nuevo”, Marlon Santi se creció a las circunstancias y logra convocar a andinos y amazónicos en la defensa de los territorios, los recursos naturales, la soberanía y la participación real —no en el “poder” pero sí en la toma de decisiones.

Al asumir el cargo dijo: “aquí estamos los verdaderos defensores de la soberanía nacional”, después de demandar la “inmediata desmilitarización de los territorios indígenas” y expresar solidaridad con Dayuma,

comunidad amazónica reprimida a fines de noviembre por el gobierno de Correa: el ejército ecuatoriano ingresó al poblado disparando y con lujo de violencia abrió las viviendas de los pobladores de Dayuma, golpeó, torturó y apresó a cientos de personas por ejercer su derecho a la protesta y a la movilización tras el corte de ruta con que la población quiso presionar al gobierno para lograr servicios básicos de luz y agua apta para consumo humano, y que Petroecuador les cumpliera los ofrecimientos que hizo para seguir explotando los yacimientos de la región.

El gobierno de Correa tiene en curso un ejercicio de “participación ciudadana” en la llamada Asamblea Constituyente, un espacio plural de partidos y organizaciones con el fin de reformar a fondo la Constitución, pero al mismo tiempo se levantan inconformes voces críticas (organizaciones, comunidades indígenas y campesinas, movimientos sociales, intelectuales y activistas de vario signo) ante lo que califican de burla por parte del Ejecutivo: emprender por un lado una reconstrucción del Estado ecuatoriano y por otro, a nivel cupular, instaurar en los reglamentos múltiples candados a lo logrado en la Asamblea.



CIENEGA DE LOS CABALLOS, JALISCO

Y es que Correa se empeña en mantener las grandes mineras y petroleras para que continúen la explotación en los territorios, sobre todo en la Amazonía, y en que el Estado “puede autorizar la ejecución de actividades mineras para el aprovechamiento racional de los recursos a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros...” Con ese afán y otorgando concesiones mineras “irrevocables” hasta por 20 años renovables y “hasta de 5 mil hectáreas contiguas”, el gobierno no muestra ninguna gana de convenir el consentimiento previo vinculante —la necesidad de que el Estado consulte de una manera profunda a las poblaciones para que ellas aprueben la explotación o no de un recurso en su propio territorio.

Cuando los movimientos sociales y la Conaie en particular han protestado, Correa afirma arrogante: “Levántense y ojalá que nos boten, para que venga otro Lucio Gutiérrez, otro Febres-Cordero, a ver si logran el consentimiento previo”. Según nota de *El Universo* (13 de mayo) no aceptará que las comunidades “tengan la posibilidad de decidir sobre la explotación de petróleo o minerales, aunque sea en sus territorios”, pues “la decisión será tomada por el Estado”.

Ante esto, mediante su Consejo de Gobierno y después de exhaustivas consultas con sus bases, la Conaie se declaró opositora del gobierno y amenazó con movilizar para demandar la figura de *consentimiento previo, libre e informado, con carácter vinculante*, lo que significa que son las comunidades, mediante la consulta y la participación, quienes deben decidir sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios. La Conaie insiste en impedir su entrega a las mineras, las petroleras, las madereras, las hidroeléctricas, las farmacéuticas. En defender biodiversidad, autogobierno, derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, soberanía alimentaria como derecho de los pueblos y la prohibición de todos los transgénicos.

Ramón Vera Herrera



MARCELINO ROBLES DOMINGUEZ, SEGUNDO CAPITAN DEL GRUPO DE JICAREROS DE LAS LATAS, MEZQUITIC, JALISCO. FOTO: JOSE CARLO GONZALEZ / LA JORNADA

# Dos poetas descubren México

## Trópicos

Me asomo:  
He ahí  
los trópicos.  
Mi vida entera  
suspiré una y otra vez por ellos.  
Y el tren  
avanza de prisa  
entre palmares  
entre platanales.  
Sus abanicantes siluetas  
adoptan figuras que marean:  
Otra me parecen sacerdotes,  
ora pintores.  
¡Ay, ni uno mismo  
da crédito a sus ojos!:  
Entre el alboroto y el hervor  
se yerguen los cactus  
cual tiros de samovar.  
Y en esas chimeneas las avecillas  
lucen más lindas que de ordinario.  
En tal sentido  
—gorrioncillos  
parecen—  
cantan claramente. No acabo  
de compenetrarme del bosque, el delirio,  
el calor  
el día,  
cuando día  
y bosque desaparecen  
sin crepúsculo  
ni  
transición.  
¿Dónde está el horizonte?

Toda línea  
se ha desvanecido.  
Aclárame  
¿cuál es la estrella  
y dónde  
están los ojos del jaguar?  
Ni el más hábil  
recaudador contaría  
las estrellas  
del trópico nocturno,  
a tal punto  
en las noches de agosto  
colmadas de luceros  
son infinitas.  
Me asomo:  
No se distingue nada.  
Mi vida entera  
suspiré por los trópicos.  
El tren sigue su marcha  
entre el paisaje,  
entre el aroma  
de los plátanos.

### Vladimir Maiakovski

En 1926, el poeta de la joven revolución soviética, visitó nuestro país. Maiakovski escribió este poema durante el viaje en ferrocarril de Veracruz a la ciudad de México. Versión aparecida en 1984 en la revista *La Palabra y el Hombre*, y recogida en *Poetas del mundo*, Cuadernos de *La Palabra*, Universidad Veracruzana, 2007. Traducción del ruso: Carlo Antonio Castro y Raymundo Aguas Franco.

## Mensajero

los capitanes del mercado común  
enviaron un mensajero a los dioses de México  
que a la media hora fue herido  
y entrevió un soplo de muerte

la muerte se parece a los indios  
según dijo después  
para bajar el dólar  
y nadie le creyó

el mensajero entrevistó a Cortés  
quien se punzó el olvido y ratificó esa visión  
la prensa amarilla no publicó el reportaje  
y la prensa de izquierda siempre está en otras cosas

a todo esto la muerte  
pasea por el mundo a caballo y con flechas  
como sabe Popotla  
de aquella noche triste

### Juan Gelman

Poema del heterónimo gelmaniano John Wendell, en *Traducciones I*, del volumen *Cólera buey* (La rosa blindada, Buenos Aires, 1971). Dos décadas después Gelman estableció su residencia en México

**página**  
final